

05088310500120130024802

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Medellín, dieciséis (16) de febrero de 2023.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05088310500120130024802, promovido por el señor **JAIRO ROJAS GONZÁLEZ** en contra de **CONSTRUCTORA DE VIVIENDA ANTIOQUEÑA S.A. COVIAN** con la finalidad de revisar en consulta la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Laboral del Circuito de Bello, el seis (6) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016) en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

05088310500120130024802

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **027**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

El señor Jairo Rojas González solicitó mediante el presente proceso, se declarará que lo unió con la empresa COVIAN S.A. un contrato verbal, de prestación de servicios profesionales para el diseño arquitectónico, construcción y ventas del proyecto MONTIBELLO, que se desarrolló en el Municipio de Bello, por ende, se le reconozca y paguen los honorarios por su labor y las comisiones por las ventas de un apartamento y un local comercial.

Como fundamento de sus pretensiones se expuso, que, en el año 2009, se inició la ejecución del proyecto habitacional Conjunto Residencial Montibello, en donde laboró. Refiere que proyectó y presentó los respectivos planos arquitectónicos hasta la aprobación que se dio por la curaduría de Bello mediante Resolución C1L288-2009, modificada por la Resolución C1L-719-2010, estando frente al proyecto bajo la modalidad de administración delegada, adeudándose: 3% por arquitectónicos, 6% por construcción de administración delegada, 3% de comisión por ventas.

05088310500120130024802

Argumentó que para el 25 de agosto de 2011 se pactó entre las partes un acuerdo de Liquidación en el cual, la empresa se compromete a cancelar la liquidación del proyecto y una vez descontados \$75.000.000 del valor del local 10 el valor restante de los honorarios, sin que a la fecha se realizara tal pago.

Admitida la demanda y notificada a la pasiva mediante auto del veintinueve (29) de mayo del año dos mil trece (2013), la accionada dio respuesta al libelo gestor indicando sobre los hechos narrados:

No ser ciertos, pues explicó que las actividades que reseñó el actor en el libelo demandatorio, fueron encomendadas a un grupo técnico que contribuyó y le hizo aportes intelectuales para la concepción del proyecto, como lo fueron LILIANA como delineante y el doctor JORGE MONTAÑEZ FLÓREZ, quienes fueron fundamentales en la ejecución del proyecto, indicando que esa labor fue encomendada de manera inicial a sociedad UNIVERSO 2000 LTDA., es decir, no al demandante como persona natural, sino, como parte de empresa. Igualmente afirma que COVIAN S.A. no le adeuda pago alguno por comisión de ventas, pues COVIAN SA vendió a ALEJANDRO TORRES ESPINOSA, AURENTINO LÓPEZ HERNÁNDEZ, NELSON RENDÓN Y JAIRO ROJAS GONZÁLEZ un local, quienes a su vez lo vendieron a SUPERMERCADOS D1, por lo cual, vendió su propiedad, y las peticiones de la demanda, no se encuentra relacionado las fechas, ventas, o características de las supuestas comisiones.

Argumenta que, es cierta la suscripción de un “acuerdo liquidatorio”, que no es más que una transacción entre las partes para zanjar algunas diferencias.

05088310500120130024802

Finalmente, se opuso a la prosperidad de las pretensiones e interpuso las excepciones que denomino: “temeridad y mala fe”, “pago”, “compensación”, “transacción”, “falta de causa para pedir”, “prescripción”.

En sentencia proferida el seis (6) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016) el Juez Laboral del Circuito de Bello, absolvió a la demandada y declaró que no existió contrato alguno de prestación de servicios para el diseño arquitectónico, construcción y venta del proyecto Montibello.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico de esta instancia, consiste en determinar si existió entre el señor JAIRO ROJAS GONZÁLEZ y CONSTRUCTORA DE VIVIENDA ANTIOQUEÑA S.A. COVIAN S.A., un contrato de prestación de servicios profesionales para el diseño arquitectónico, construcción y ventas del proyecto Montibello, y de ser así, establecer que rubros se adeudan por ello.

CONSIDERACIONES

Los honorarios profesionales, son la remuneración de los servicios que una persona presta a otra (natural o jurídica), en la cual predomina el factor intelectual sobre el técnico, material, manual o mecánico en una relación contractual no subordinada.

Es imperativo, por tanto, que quien pretende el pago de los honorarios, demuestre que contrató con otro la labor remunerativa, que la llevó a cabo, y que no se le cancelo el importe económico pactado.

La carga probatoria, se enmarca en las reglas generales determinadas en el artículo 167 del CGP, según las cuales, corresponde al demandante demostrar los hechos en que funda sus pretensiones y a la parte pasiva, el fundamento fáctico de las excepciones propuestas.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre el principio universal de la carga probatoria, y ha explicado con claridad, que quien afirma una cosa está obligado a probarla. Es así pues, como quien pretende o demanda un derecho debe alegarlo, y adicionalmente, debe demostrar los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba al demandado cuando éste se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado (sentencia de 5 de agosto de 2009, Expediente 36.549).

Puntualmente, en procesos como el de marras, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, consideró en sentencia SL 4902 de 2021,

“Acorde con dichos planteamientos, lo primero que debe indicar la Sala, es que contrario a lo manifestado por el actor, la acción se instauró para que se declarara el derecho al reconocimiento y pago de los honorarios, es decir, un proceso declarativo, en el que, con las pruebas aportadas por el interesado, conforme con el principio general de la carga de la prueba, prevista en el artículo 177 del CPC -hoy artículo 167 del CGP- debe demostrar que: i) celebró un contrato para una gestión determinada, partiendo de la base que a las partes ha quedado la facultad primigenia para definir la contraprestación de los servicios, y si existe ese pacto, aquél se erige en la fuente que normalmente define la controversia generada, en razón al tipo de cláusulas y el objeto del contrato; ii) que ésta fue realizada y, iii) que conforme con las reglas o clausulado celebrado entre las partes, se tasó un reconocimiento monetario.”

El contrato de prestación de servicios no tiene una regulación especial, por ende, se estudia conforme a las reglas generales de las obligaciones y los contratos establecidas en los artículos 1494 y s.s. del Código Civil.

Conforme la prueba recaudada en el proceso, se puede constatar lo siguiente:

El señor Jairo Rojas González suscribió en calidad de arquitecto proyectista el formulario único nacional de solicitud de licencia urbanística que fue presentado en la curaduría primera de bello, con otros profesionales, Jorge Montañez Flórez, Hernán Darío Cano, Frank Montoya, para el desarrollo de la obra ubicada en diagonal 62 número 40b-15/37.

Respecto a los locales comerciales 09-10 de la torre 2, se suscribió contrato de promesa de compraventa entre Alejandro Torres Espinosa, Aurentino López Hernández Nelson Rendón Estrada y Jairo Rojas González como compradores y Covian S.A. como vendedores, en donde se pacta en la clausura CUARTA literal d, lo siguiente:

“El señor JAIRO ROJAS GONZALEZ pagará la suma de ciento treinta millones de pesos (130.000.000) esta suma será pagada con el producto de la liquidación que tiene pendiente con COVIAN SA por concepto de alquiler de equipos, el contrato de administración delegada, cuotas de participación y valor de los planos arquitectónicos. “

En el documento que reposa en página 5-6 del expediente, se constata que se realizó un acuerdo de liquidación suscrito entre COVIAN SA, Jairo Rojas González y Martha Eugenia plata Dueñas, en donde se resalta:

“El saldo pendiente, es decir la suma de \$75.000.000 millones de pesos más los valores pendiente por concepto de reformas y acondicionamiento del local n° 9 y 10, serán pagados con el producto de la liquidación que LA EMPRESA debe a:

- a) Al señor Jairo Rojas Gonzalez por concepto de planos, construcción, y otros,*
- b) A la señora Martha Eugenia plata Dueñas por concepto de las utilidades (16.65%) sobre la liquidación del proyecto.*

Los referidos documentos considerados de manera individual, no traen luz alguna respecto al tipo de relación contractual que vinculó a las partes, empero, el testimonio del señor Fernando de Jesús Naranjo, si tiene la fuerza explicativa suficiente para la comprensión de lo sucedido. Explicó en su juramentada, que entre COVIN S.A. y el señor Jairo Rojas González existió un acuerdo asociativo, situación, que da claridad a la cláusula cuarta del contrato de compraventa respecto al alquiler de equipos cuotas de participación y planos, situación que dijo conocer, pues se encontraba presente al momento del acuerdo verbal de voluntades.

Igualmente, el testigo Esteban Delgado Lopera, y quien suscribió con el actor el acuerdo de liquidación, pues para ese momento fungía como representante legal de la demandada, narró como el señor Rojas González si trazó algunos planos del proyecto, empero, para ello, fungió como representante de la sociedad Universo 2.000, persona jurídica diferente a la parte actora de este proceso.

No existe elemento probatorio alguno en el proceso que arroje certeza sobre la existencia de un acuerdo de voluntades entre el señor Jairo Rojas González y la Constructora de vivienda Antioqueña SA para la elaboración de anteproyectos, proyecto arquitectónico, modificaciones del proyecto, ventas de apartamento por

05088310500120130024802

comisión, o administración delegada de la construcción Conjunto Residencial Montibello, por el contrario, reconoció el demandante en el interrogatorio de parte, la cesión de la promesa de compraventa que había suscrito respecto a los locales comerciales 09-10 de la torre 2, sin que pruebe obligación de la pasiva en remunerarle su actuar, es decir, el pago de comisión.

Los elementos recaudados revisados bajo la sana crítica, y la libre formación del convencimiento previsto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, no orientan el convencimiento judicial en torno a los hechos narrados en el libelo genitor y sus pretensiones.

Se concluye, por tanto, que en el presente evento el demandante no cumplió con la carga probatoria referida, razón por la cual debe confirmarse la decisión absolutoria que se revisa en consulta.

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión que se revisa en consulta, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

05088310500120130024802

TERCERO: Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Se ordena regresar el expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **464553b883e8dd5601d66af5c735151fcc461bbf3f4852abc7683f982f6241ca**

Documento generado en 16/02/2023 02:56:52 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>